



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veinte de septiembre de dos mil veintiuno

Litigio: Ejecutivo hipotecario
Procedencia: Juzgado Catorce Civil del Circuito
Radicado: 050013103 014 2018 00491 01
Demandantes: Pompilio de Jesús Yepes Aristizábal
Opositores: Ángela Yaneth Ruiz Vásquez
Decisión: Niega casación

ANTECEDENTES

El apoderado de la parte demandante formuló recurso de casación respecto de la sentencia de segunda instancia proferida por este Tribunal en el asunto de la referencia.

CONSIDERACIONES

El artículo 334 del Código General del Proceso -CGP- señala que la casación procede frente a las sentencias dictadas en los procesos declarativos, en las acciones de grupo y las que se dictan para liquidar una condena en concreto.

Esta norma establece un criterio material limitativo de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer asuntos en sede casación, que a la vez optimiza el valor de la cosa juzgada de las decisiones de los Tribunales en los asuntos sometidos a su competencia.

Esto significa que el tipo de decisiones que no se encuentren expresamente referidas en la disposición legal, no son susceptibles del recurso de casación, sin perjuicio de las demás posibilidades de defensa que la ley establezca a favor de las partes (revisión, tutela).

Las sentencias que se dictan en los procesos ejecutivos con resolución de excepciones ni está expresamente contemplada en las disposiciones legales, ni puede comprenderse válidamente desde una de las categorías normativas del artículo 334 del CGP.

La Corte Suprema de Justicia, tanto en sentencias como en autos donde se resuelven recursos de queja, se ha pronunciado sobre la improcedencia de la casación respecto de los procesos ejecutivos en las siguientes decisiones: STL5025-2019, STC2065-2019, AC3405-2018, AC058-2018, AC8251-2017, entre otras. La Corte se apoya en precedentes desde 1992 para negar su competencia en estos asuntos, bajo la vigencia del Código General del Proceso.

Podría interpretarse que cuando se proponen y deciden excepciones en un proceso ejecutivo, tanto el procedimiento como la decisión que se adoptan pasan a ser “declarativas”, en el sentido de que se está declarando judicialmente certeza sobre la existencia, validez o eficacia de un derecho en litigio, relativo al título ejecutivo.

Sin embargo, el criterio de interpretación prevalente en la jurisdicción es el criterio sistemático y restrictivo de su propia competencia: en el contexto de la codificación, tanto la competencia del juez como la clase de procedimiento, depende de la pretensión que introduce la parte en la demanda. El proceso es ejecutivo -distinto a los declarativos, a los liquidatorios o a los procesos especiales- cuando lo que se persigue es la ejecución de un derecho con base en un título ejecutivo. Cuando se libra mandamiento de pago con base en esa pretensión, el proceso y su

decisión se regulan por las disposiciones del proceso ejecutivo y las regulaciones sustanciales relativas a los títulos ejecutivos, incluidas las excepciones y el trámite para su resolución.

Podría argumentarse que esta interpretación limita el derecho de contradicción de las partes en los procesos ejecutivos, quienes no tendrían la posibilidad de agotar la casación en estos asuntos. Además, impide que la Corte establezca criterios judiciales de interpretación en relación a los títulos ejecutivos y sus procedimientos.

Sin embargo, esta limitación parece razonable en la medida que: a) por un lado, la ley garantiza a las partes un proceso de doble instancia para ejercer los derechos de defensa y contradicción b) por otro, generalmente la decisión de un proceso ejecutivo no cierra la discusión ante la jurisdicción, en la medida que pueden formularse nuevas pretensiones para discutir el derecho subyacente al título. c) Si la parte considera que los yerros en las sentencias de los jueces de instancia comprometen su derecho fundamental al debido proceso, puede acudir a la tutela; d) La Corte puede generar doctrina y precedentes en torno a los títulos ejecutivos o sus procedimientos en las tutelas, en los recursos de revisión y en los procesos declarativos que incorporen en el litigio títulos ejecutivos.

Como en este caso la sentencia decidió una pretensión ejecutiva y finalizó un procesos ejecutivo, la casación es improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

No conceder el recurso de casación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia de segunda instancia dictada por este Tribunal en el proceso ejecutivo de la referencia.

Notifíquese y cúmplase;

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Martín Agudelo Ramírez', with a stylized flourish at the end.

MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ

Magistrado